



Asamblea General

Distr. general
29 de mayo de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 87º período de sesiones, 27 de abril a 1 de mayo de 2020

Opinión núm. 16/2020, relativa a Ngô Văn Dũng (Viet Nam)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.
2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 4 de octubre de 2019 al Gobierno de Viet Nam una comunicación relativa a Ngô Văn Dũng. El Gobierno respondió a la comunicación el 3 de enero de 2020. Viet Nam es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
 - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
 - b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
 - c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);
 - d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);
 - e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole,



género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Ngô Văn Dũng es un ciudadano de Viet Nam de 50 años. Es un bloguero y activista. Habitualmente reside en la provincia de Dak Lak (Viet Nam).

5. Desde junio de 2017 el Sr. Dũng ha escrito artículos y ha publicado vídeos en directo y grabados en medios sociales con el fin de promover las libertades democráticas. Es miembro de Reviving Viet Nam Campaign, un movimiento en favor de la democracia que aboga por la libertad de prensa en Viet Nam, así como del grupo de derechos constitucionales *Hien Phap*, cuyo objetivo es informar a los ciudadanos sobre sus derechos. Según la fuente, ambas organizaciones han sido blanco de las autoridades por su activismo contra el Gobierno.

6. Antes de su privación de libertad, el Sr. Dũng había cubierto con frecuencia diversos acontecimientos por conducto de plataformas de Internet. Esas actividades han ido desde filmar numerosas protestas hasta comentarlas activamente. El Sr. Dũng también ha publicado en línea un vídeo en el que se critica la condena de la bloguera Tran Thi Nga¹. El Sr. Dũng también había filmado y participado pacíficamente en una protesta en Ciudad Ho Chi Minh organizada por *Hien Phap* contra los planes del Gobierno de aprobar proyectos de ley sobre ciberseguridad y la creación de zonas económicas especiales. La fuente informa de que las fuerzas de seguridad comenzaron a tomar medidas contra los miembros de *Hien Phap* mediante una serie de detenciones llevadas a cabo para reprimir nuevas manifestaciones.

Detención y privación de libertad

7. En marzo de 2018 el Sr. Dũng fue detenido y privado de libertad durante varias horas antes de ser puesto en libertad. Según la fuente, la detención se llevó a cabo en represalia por las actividades del Sr. Dũng como activista de derechos humanos y bloguero. La detención se produjo después de que el Sr. Dũng hubiera filmado en su provincia natal de Dak Lak una manifestación de maestros de escuela que habían sido despedidos de su empleo. Durante la privación de libertad, se confiscó el teléfono móvil del Sr. Dũng, que se había utilizado para filmar la manifestación, y el Sr. Dũng fue interrogado durante varias horas. Fue puesto en libertad más tarde el mismo día y multado con 2 millones de dong vietnamitas por “causar desorden público”.

8. El 4 de septiembre de 2018 el Sr. Dũng fue detenido de nuevo por agentes de policía cuando estaba retransmitiendo en directo una protesta en Ciudad Ho Chi Minh. Otros siete miembros de *Hien Phap* también fueron detenidos el 4 de septiembre de 2018 o alrededor de esa fecha. Los agentes que detuvieron al Sr. Dũng no le proporcionaron una copia de la orden de detención en el momento de la detención. Según la fuente, la orden de detención estaba fechada el 21 de septiembre de 2018 y fue recibida por la familia del Sr. Dũng el 5 de octubre de 2018. En la orden de detención se indica que el Sr. Dũng fue detenido con arreglo al artículo 118 del Código Penal de 2015 por el delito de “alteración de la seguridad”, que se castiga con 15 años de prisión.

9. Varias horas después de la detención, la familia del Sr. Dũng fue informada a través de la página de medios sociales de este de que había sido detenido y permanecía en el distrito Ben Nghe, en el Distrito 1. Puesto que la información sobre el paradero del Sr. Dũng no había sido confirmada por las autoridades, la familia del Sr. Dũng recurrió a buscarlo visitando múltiples comisarías de policía. La fuente alega que la familia del Sr. Dũng ha estado enviando alimentos regularmente a la prisión del distrito Bin Hai, en el Distrito 4, donde creen que permanece, pero no tienen confirmación de que esté recibiendo los alimentos. Desde su detención, el Sr. Dũng ha permanecido en régimen de incomunicación y no ha tenido contacto con su familia ni acceso a un asesor letrado. La

¹ La Sra. Nga es objeto de la Opinión núm. 75/2017 del Grupo de Trabajo.

familia del Sr. Dững no sabe nada de su estado de salud ni de las condiciones de su privación de libertad, ni de los detalles de las acusaciones formuladas contra él.

Análisis de las vulneraciones cometidas

10. La fuente sostiene que la detención y privación de libertad del Sr. Dững son arbitrarias y se inscriben en las categorías I, II y III.

Categoría I

Detención sin una orden y sin ser informado sin demora de las acusaciones

11. La fuente alega que el Sr. Dững fue detenido sin una orden de detención y no fue informado sin demora de las razones de su detención y que las autoridades no presentaron acusaciones contra él en el momento de su detención. La orden de detención proporcionada a la familia del Sr. Dững se dictó el 21 de septiembre de 2018, 17 días después de su detención, lo que parece indicar que no existía ninguna orden de detención el día de su detención y que el Sr. Dững no fue informado de las acusaciones formuladas contra él, en violación del artículo 9, párrafo 2, del Pacto.

Acusaciones en virtud de una disposición vaga y excesivamente amplia

12. El Sr. Dững fue detenido y privado de libertad en virtud del artículo 118, párrafo 1, del Código Penal, que dice: “Toda persona que, con el fin de oponerse al gobierno popular, incite, persuada o reúna a otras personas para perturbar la seguridad, resista a los agentes del orden en el desempeño de sus funciones u obstruya el funcionamiento de organismos u organizaciones será castigada con una pena de 5 a 15 años de prisión, salvo en los casos especificados en el artículo 112 del presente Código”². En esa disposición no se define lo que se entiende por perturbación de la seguridad y se utilizan expresiones vagas como “incite”, “persuada” y “reúna” sin definir las. Las Naciones Unidas ya han recomendado la derogación o revisión de numerosos artículos del Código Penal vietnamita, entre ellos el artículo 118, por su incompatibilidad con las obligaciones en materia de derechos humanos asumidas por Viet Nam en virtud del Pacto.

13. En la orden de detención dictada contra el Sr. Dững se indica que se le acusó de “causar desórdenes públicos”, en violación del artículo 118 del Código Penal. Cabe destacar que no está definido en la disposición ni en ninguna otra parte del Código Penal lo que constituye “causar desórdenes públicos”. Además, la diferencia entre la redacción del artículo 118 (“perturbar la seguridad”) y la naturaleza del presunto delito detallado en la orden de detención del Sr. Dững (“causar desórdenes públicos”) demuestra la manera arbitraria en que se ha aplicado la disposición en el presente caso.

14. El artículo 118 del Código Penal es incompatible con el artículo 11, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y con el artículo 15, párrafo 1, del Pacto y no puede considerarse “prescrito por la ley” o “definido con precisión suficiente” debido a su redacción vaga y excesivamente amplia³.

Categoría II

Privación de libertad como consecuencia del ejercicio del derecho a la libertad de expresión

15. La fuente sostiene que el Sr. Dững fue privado de libertad por ejercer su derecho a la libertad de expresión con arreglo al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto.

² El artículo 112 del Código Penal establece las sanciones por el delito de participación en actividades armadas o uso de la violencia contra el Gobierno.

³ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34 (2011), relativa a la libertad de opinión y la libertad de expresión, párr. 25.

16. En virtud del artículo 19, párrafo 3, del Pacto, toda restricción impuesta al derecho a la libertad de expresión debe estar expresamente fijada por la ley, debe estar concebida para conseguir un objetivo legítimo y debe imponerse con arreglo a los criterios de necesidad y proporcionalidad⁴. La detención y privación de libertad del Sr. Dũng no cumplen esos criterios.

17. La detención y privación de libertad del Sr. Dũng no estaban “fijados por la ley”⁵. Para ser calificada de “ley” en el sentido del artículo 19, párrafo 3, del Pacto, una disposición legislativa debe estar formulada con precisión suficiente para que una persona pueda regular su comportamiento de conformidad con ella⁶. Además, la disposición no puede conferir a los encargados de su aplicación una discrecionalidad sin trabas para restringir la libertad de expresión⁷. El artículo 118 del Código Penal es incompatible con el artículo 19, párrafo 3, del Pacto porque es vago y excesivamente amplio. Al no definir lo que se entiende por “perturbación de la seguridad” ni circunscribir el alcance de las actividades prohibidas, la disposición no tiene un alcance o limitación discernibles, hace caso omiso del principio de seguridad jurídica e impide que las personas regulen sus acciones de conformidad con la ley. Las restricciones a la libertad de expresión no deben poner en peligro el derecho propiamente dicho⁸. El Comité de Derechos Humanos ha recomendado que se revise el artículo 118 para incluir una definición clara de las actividades prohibidas. Esa recomendación aún no se ha aplicado.

18. La posibilidad de que el artículo 118 del Código Penal se aplique de manera abusiva y arbitraria es evidente por la naturaleza de la disposición. La expresión “con el fin de oponerse al gobierno popular” puede ser interpretada ampliamente por las autoridades. El hecho de que la disposición no defina la actividad prohibida conlleva el riesgo de que la ley se interprete para penalizar el ejercicio de libertades fundamentales. Al no definir explícitamente las actividades que están prohibidas en virtud del artículo 118, las autoridades pueden utilizar esa norma para reprimir la disidencia política y castigar a las personas cuyo comportamiento pueda suponer una amenaza para las autoridades.

19. El artículo 19, párrafo 3, del Pacto exige que toda restricción de la libertad de expresión se imponga únicamente con fines específicos y legítimos, a saber, la protección de la seguridad nacional, el orden público y la salud o la moral públicas. El Sr. Dũng fue privado de libertad en virtud del artículo 118, que tipifica como delito la actividad que cause una “perturbación de la seguridad”. Esto parece indicar que el motivo subyacente de la detención podría ser la protección de la seguridad nacional, que es un objetivo legítimo reconocido en el artículo 19, párrafo 3 b), del Pacto. Sin embargo, el alcance de ese motivo es limitado. No es compatible con el párrafo 3 hacer valer esas leyes para suprimir información de interés público legítimo que no perjudica a la seguridad nacional, o impedir al público el acceso a esta información, o para procesar a periodistas por haber difundido esa información⁹. Además, los Gobiernos no deben utilizar el artículo 19, párrafo 3, del Pacto para silenciar cualquier defensa de la democracia por parte de los periodistas¹⁰. Tampoco pueden ser compatibles con el artículo 19, en circunstancia alguna, los atentados contra una persona, con inclusión de formas tales como la detención arbitraria, la tortura, las amenazas de muerte y el asesinato¹¹ por haber ejercido su derecho a la libertad de opinión o de expresión.

20. El Sr. Dũng difundió artículos en los medios sociales en los que criticaba al Gobierno y retransmitió en directo vídeos de una protesta pacífica contra la creación de zonas económicas especiales. La expresión que “propugna un cambio no violento de la política gubernamental o del propio Gobierno” o “constituye una crítica o un insulto a la

⁴ *Ibid.*, párrs. 21 a 36.

⁵ *Ibid.*, párr. 22.

⁶ *Ibid.*, párr. 25.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, párr. 21.

⁹ *Ibid.*, párr. 30. Véase también E/CN.4/1995/32, párr. 48.

¹⁰ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34, párr. 23.

¹¹ *Ibid.* En su observación general núm. 34, el Comité de Derechos Humanos también señala que los periodistas son objeto con frecuencia de amenazas de esa índole, de intimidación y de atentados a causa de sus actividades.

nación, al Estado o a sus símbolos, al Gobierno, a sus organismos o a los funcionarios públicos¹² no se considera una amenaza para la seguridad nacional. No hay pruebas de que el Sr. Dũng presentase una amenaza para la seguridad nacional o para cualquiera de los demás intereses legítimos enumerados en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto. El Sr. Dũng estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión informando sobre las protestas y expresando sus opiniones sobre cuestiones de actualidad a través de los medios sociales. Las autoridades no han presentado ninguna prueba que demuestre que el Sr. Dũng constituye una amenaza y, por lo tanto, no persiguen un objetivo legítimo con su detención y privación de libertad.

21. Toda restricción del derecho a la libertad de expresión debe ser un medio necesario y proporcionado para alcanzar un objetivo legítimo, lo que significa que debe ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir su función protectora¹³. Al evaluar la proporcionalidad, la forma de expresión es muy relevante: el Pacto atribuye una gran importancia a la expresión sin inhibiciones en el debate público sobre figuras del ámbito público y político¹⁴. Las informaciones del Sr. Dũng en los medios sociales no demuestran ninguna prueba de incitación o participación en conductas violentas. Los asuntos que planteó a través de su activismo entran dentro de las formas de expresión que nunca deben restringirse.

22. Además, la privación de libertad del Sr. Dũng en régimen de incomunicación es desproporcionada y no puede justificarse como el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir su función protectora¹⁵. El Sr. Dũng no supone ninguna amenaza para la seguridad nacional. Su detención y privación de libertad en régimen de incomunicación no pueden considerarse proporcionadas en las circunstancias.

Privación de libertad como consecuencia del ejercicio del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos

23. La fuente sostiene que el Sr. Dũng fue privado de libertad por ejercer su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos en virtud del artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 25 del Pacto.

24. El Comité de Derechos Humanos ha interpretado que esa garantía abarca el derecho de los ciudadanos a ejercer influencia mediante el debate y el diálogo públicos gracias a su capacidad para organizarse¹⁶. Las actividades del Sr. Dũng, en concreto sus críticas y su oposición al Gobierno, su campaña en favor de la democracia mediante la difusión de copias de la Constitución y su retransmisión en vivo de manifestaciones y protestas pacíficas, están protegidas y no deben ser objeto de restricciones indebidas.

25. De conformidad con el artículo 2, párrafo 1, del Pacto, ese derecho debe respetarse y garantizarse a todos los ciudadanos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. El Sr. Dũng fue detenido mientras filmaba una protesta pública. Las circunstancias de su detención y privación de libertad son probablemente resultado directo de su participación en la manifestación y su activismo político. Al detener y privar de libertad al Sr. Dũng, las autoridades lo han distinguido de otros ciudadanos por motivo de su opinión política y le han denegado el derecho a participar en los asuntos públicos.

¹² Principios de Johannesburgo sobre Seguridad Nacional, Libertad de Expresión y Acceso a la Información (E/CN.4/1996/39, anexo), principio 7.

¹³ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34, párr. 34. Véase también A/HRC/14/23, párr. 79 g) iv).

¹⁴ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34, párr. 34. Véase también la resolución 12/16 del Consejo de Derechos Humanos, párr. 5 p).

¹⁵ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 27 (1999), relativa al artículo 12 (Libertad de circulación), párr. 14.

¹⁶ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 25 (1996), relativa a la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, párr. 8.

26. Cualesquiera restricciones que se impongan al derecho consagrado en el artículo 25 del Pacto deben ser objetivas y razonables¹⁷. El Sr. Dũng se convirtió en blanco de las autoridades estatales por su activismo en favor de la protección de los derechos constitucionales y la democracia. El día de su detención, el Sr. Dũng estaba filmando las manifestaciones de manera pacífica y no representaba una amenaza para el Estado. Estaba ejerciendo legítimamente su derecho en virtud del artículo 25. Las autoridades no restringieron ese derecho sobre la base de criterios razonables y objetivos.

Categoría III

Derecho a ser informado de la naturaleza y causas de la acusación

27. Las condiciones de la detención y privación de libertad del Sr. Dũng violaron su derecho a ser informado de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra él. Ese derecho se establece en el artículo 14, párrafo 3 a), del Pacto y se reitera en el principio 10 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. El derecho a ser informado sin demora de la acusación exige que la información se proporcione tan pronto como una autoridad competente, con arreglo al derecho interno, formule la acusación contra una persona¹⁸. No hay pruebas de que se proporcionase o mostrase al Sr. Dũng la orden de detención en el momento de la detención, ni tampoco hay indicios de que se le informase sin demora de la acusación y de sus derechos en el momento de su detención.

28. La familia del Sr. Dũng no recibió la orden de detención hasta el 5 de octubre de 2018, alrededor de un mes después de su detención. El artículo 14, párrafo 3 a), del Pacto establece que la familia de una persona privada de libertad tiene derecho a ser informada de la naturaleza y causas de la acusación. Ese derecho ha sido vulnerado. Ni el Sr. Dũng ni su familia fueron informados sin demora de la naturaleza y causas de la acusación, en contra de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 3 a), del Pacto.

Derecho a comunicarse con un abogado y familiares

29. No hay pruebas de que el Sr. Dũng haya tenido acceso a un asesor jurídico desde su detención. El hecho de no proporcionar acceso a un asesor jurídico viola el principio 11 del Conjunto de Principios, en virtud del cual se dará a una persona la oportunidad de ser oída sin demora y tendrá derecho a defenderse por sí misma o a ser asistida por un abogado¹⁹. El que se disponga o no de asistencia letrada determina con frecuencia que una persona pueda tener acceso a las actuaciones judiciales pertinentes o participar en ellas de un modo válido²⁰. La falta de acceso a un asesor jurídico es gravemente perjudicial para la equidad procesal de la privación de libertad del Sr. Dũng.

30. El Sr. Dũng permanece en régimen de incomunicación y no ha podido comunicarse con su familia ni con el mundo exterior, en contra de los principios 15 y 16 del Conjunto de Principios. La familia del Sr. Dũng no ha podido comunicarse con él y no ha recibido más información de las autoridades ni ha tenido más comunicación con ellas desde el 4 de septiembre de 2018. De conformidad con el principio 15 del Conjunto de Principios, la comunicación con el mundo exterior no debe denegarse por más de algunos días. Han transcurrido al menos diez meses y no se ha permitido al Sr. Dũng comunicarse con su familia o con su asesor jurídico desde su detención en septiembre de 2018. Su privación de libertad en régimen de incomunicación viola el principio 16 del Conjunto de Principios, según el cual la persona detenida o presa tendrá derecho a notificar, o a pedir que la autoridad competente notifique, a su familia, su arresto, detención o prisión y el lugar en que se encuentra bajo custodia judicial. Los derechos del Sr. Dũng a comunicarse con un asesor jurídico y con su familia se han visto gravemente menoscabados, en violación del

¹⁷ *Ibid.*, párr. 4.

¹⁸ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 31.

¹⁹ Véase también el principio 7 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados.

²⁰ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32, párr. 10.

artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto y los principios 15, 18, párrafo 2, y 19 del Conjunto de Principios.

Derecho a un juicio imparcial, especialmente el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas

31. El artículo 14, párrafo 3 c), del Pacto garantiza el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas. Los juicios expeditivos son importantes para garantizar no solo que la privación de libertad no se prolongue más de lo necesario en las circunstancias del caso, sino también que redunde en interés de la justicia²¹. El Sr. Dững lleva privado de libertad desde su detención el 4 de septiembre de 2018. Hasta la fecha, no hay indicios de que se haya celebrado un juicio o de que se vaya a celebrar uno próximamente. Además, parece que el período de detención preventiva de cuatro meses que permite la legislación nacional expiró en enero de 2019.

32. El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14, párrafo 1, del Pacto garantizan el derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal independiente e imparcial. A la familia del Sr. Dững no se le ha comunicado la fecha del juicio ni un informe de las actuaciones. Si el Sr. Dững ha sido juzgado, esto no se ha hecho público. Ha habido una falta de transparencia por parte de las autoridades vietnamitas durante la detención y privación de libertad del Sr. Dững. El requisito de la independencia e imparcialidad de un tribunal es un derecho absoluto²². Otros juicios de blogueros encarcelados por ejercer el derecho a la libertad de expresión parecen indicar que los procedimientos en Viet Nam rara vez se llevan a cabo ante un órgano imparcial.

33. La falta de información sobre la detención del Sr. Dững, sobre el lugar de su privación de libertad y sobre la existencia de un juicio indican que las autoridades vietnamitas no han cumplido obligaciones procesales esenciales en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

Respuesta del Gobierno

34. El 4 de octubre de 2019, en el marco de su procedimiento ordinario de comunicación, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno y le pidió que, a más tardar el 3 de diciembre de 2019, facilitara información detallada sobre la situación actual del Sr. Dững. El Grupo de Trabajo también pidió al Gobierno que aclarara las disposiciones jurídicas que justificaban la continuación de la privación de libertad del Sr. Dững, así como su compatibilidad con las obligaciones de Viet Nam en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Además, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno a velar por la integridad física y mental del Sr. Dững.

35. El 3 de diciembre de 2019, el Gobierno solicitó una prórroga del plazo de respuesta. Se accedió a su solicitud y se fijó como nueva fecha límite el 3 de enero de 2020. El Gobierno proporcionó su respuesta el 3 de enero de 2020.

36. El Gobierno pone de relieve que el Sr. Dững no fue detenido, investigado y enjuiciado por el ejercicio de libertades fundamentales, que están reconocidas en la legislación vietnamita y en el derecho internacional de los derechos humanos.

37. El 12 de marzo de 2018 el Sr. Dững y otra persona entrevistaron a maestros que estaban en conversaciones con su junta directiva sobre la extinción de los contratos de trabajo. Durante esas entrevistas, el Sr. Dững tomó fotografías y retransmitió en directo vídeos en línea mientras gritaba y perturbaba el orden público, a pesar de las persistentes advertencias de los guardias de la escuela. Posteriormente, la policía del distrito de Phuoc An emitió citaciones administrativas con multas de 2 millones de dong vietnamitas cada una y confiscó dos teléfonos móviles que se habían utilizado para tomar fotografías no autorizadas, grabar películas no autorizadas y dibujar diagramas de zonas restringidas. El Sr. Dững no fue retenido ni arrestado.

²¹ *Ibid.*, párr. 35.

²² *Ibid.*, párr. 19.

38. Durante las semanas anteriores al día nacional vietnamita, el 2 de septiembre de 2018, y después de recibir informaciones de la población local de que un grupo de personas se reunía regularmente y realizaba actos sospechosos, la policía de Ciudad Ho Chi Minh abrió una investigación y descubrió que ese grupo, que incluía al Sr. Dũng, se había puesto en contacto con personas en el extranjero y había sido patrocinado por ellas para llevar a cabo actividades antiestatales. Una entidad extranjera estaba suministrando al grupo importantes recursos financieros, así como medicinas y látigos eléctricos de fabricación casera, que se utilizarían para llevar a cabo un plan. El grupo había celebrado dos reuniones, los días 25 y 31 de agosto de 2018, para elaborar su plan, asignar tareas, preparar armas (entre ellas, ganchos de hierro afilados y látigos eléctricos de fabricación casera) y adiestrar a personas en técnicas para atacar a la policía.

39. El 4 de septiembre de 2018 la policía convocó a los miembros de ese grupo y descubrió que habían difundido videoclips a través de Internet para incitar a la población a participar en reuniones y protestas ilegales y a utilizar armas para atacar a la policía con el fin de provocar violencia, aislar aeropuertos, estaciones de ferrocarril y puertos, y ocupar oficinas gubernamentales, con miras a derrocar al Gobierno. El Sr. Dũng admitió que había aportado la idea de quemar motocicletas viejas para llamar la atención e intercambiado información con otros miembros del grupo sobre el modo de fabricar bombas de gasolina para distribuir las a otros manifestantes con el fin de atentar contra a la policía y provocar la violencia de las multitudes. Una búsqueda posterior en las cuentas de los medios sociales del Sr. Dũng reveló muchos documentos y videoclips que difamaban la administración popular, distorsionaban la política del Estado e incitaban a la población a celebrar protestas y disturbios violentos y a tomar por la fuerza y destruir oficinas administrativas.

40. Las autoridades decidieron adoptar medidas para impedir que el Sr. Dũng y sus cómplices llevaran a cabo su plan, ya que sus actos tenían por objeto causar graves daños a la seguridad nacional, el orden social y la seguridad de la población común en lugares públicos.

41. El 14 de septiembre de 2018 el Departamento de Seguridad Pública de Ciudad de Ho Chi Minh emitió una orden de custodia judicial y una orden de detención de emergencia contra el Sr. Dũng. Ambas fueron aprobadas por la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh. En el momento de la detención se mostraron al Sr. Dũng las órdenes de detención, que firmó, y se le informó de las acusaciones formuladas contra él. El 21 de septiembre de 2018 el Departamento de Seguridad Pública emitió una decisión de iniciar un procedimiento penal y una orden de privación de libertad contra el Sr. Dũng citando la acusación de “perturbación de la seguridad” en virtud del artículo 118 del Código Penal. La decisión había sido aprobada por la Fiscalía Popular competente. Todas las órdenes y decisiones se comunicaron debidamente al Sr. Dũng, así como a su familia y a la administración local. Las alegaciones de que el Sr. Dũng fue detenido sin una orden de detención y de que no se le informó de las razones de su detención en ese momento son infundadas.

42. En respuesta a las alegaciones de que el artículo 118 del Código Penal es vago y puede dar lugar a una interpretación arbitraria, el Gobierno señala que esa disposición establece una distinción clara entre el ejercicio de las libertades democráticas y las actividades ilegales. No penaliza el ejercicio de la libertad de expresión, sino que solo castiga a quienes abusan de ese derecho para llevar a cabo actividades ilegales. El artículo 118 está plenamente en consonancia con las convenciones internacionales de derechos humanos en las que es parte Viet Nam.

43. El 18 de diciembre de 2018 el organismo de investigación policial de Ciudad Ho Chi Minh envió una nota a un abogado sobre la participación un asesor jurídico en el proceso judicial. Debido a la naturaleza particularmente grave del caso del Sr. Dũng, que implicaba a muchas personas en muchas localidades y la necesidad extrema de mantener el secreto durante las investigaciones, los abogados defensores solo podían participar en el procedimiento después de la fase de investigación, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal. Las autoridades no interfirieron en la participación de los abogados.

44. Las decisiones sobre la prisión preventiva se ejecutan mediante un proceso riguroso establecido en el Código de Procedimiento Penal. En el presente caso, cada prórroga de la orden de prisión preventiva fue aprobada por la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh y comunicada a la familia del Sr. Dũng. Dada la naturaleza compleja del caso del Sr. Dũng, era fundamental que el período de prisión preventiva se prorrogara varias veces para permitir unas investigaciones exhaustivas, un juicio imparcial y una sentencia apropiada. El juicio del Sr. Dũng está actualmente pendiente.

45. Poco después de la detención del Sr. Dũng, la policía de Ciudad Ho Chi Minh informó a su familia y a su administración local sobre la detención. El Sr. Dũng recibe suministros de su familia dos veces al mes y se le permitió reunirse con su esposa cuatro veces entre agosto y noviembre de 2019.

46. En prisión preventiva, el Sr. Dũng nunca ha sido sometido al régimen de aislamiento. Se han respetado sus derechos en materia de alimentación, alojamiento, vestido y condiciones generales de vida, así como otros derechos previstos por la ley. El Sr. Dũng ha recibido la atención sanitaria y los medicamentos adecuados, como exige la ley. De resultados de un reconocimiento médico se determinó que su estado de salud era adecuado para ser admitido en el centro de detención de Ciudad Ho Chi Minh el 17 de septiembre de 2018. Además de asistir a las citas programadas en el centro de detención, el Sr. Dũng fue enviado en tres ocasiones a hospitales externos, en noviembre de 2018 y mayo y octubre de 2019. Su salud es normal.

47. El Sr. Dũng está actualmente en el centro de prisión preventiva de la policía del distrito de Binh Thanh de Ciudad Ho Chi Minh.

Comentarios adicionales de la fuente

48. La versión de los hechos del Gobierno confirma que el Sr. Dũng fue detenido y privado de libertad el 12 de marzo de 2018. El Gobierno acepta que los agentes de policía quitaron el teléfono móvil al Sr. Dũng y es difícil sostener que esa confiscación pudiera tener lugar sin que se ejerciera cierto nivel de control físico sobre él.

49. La afirmación del Gobierno de que la detención, la privación de libertad y el enjuiciamiento del Sr. Dũng fueron conformes a la ley es incorrecta jurídicamente y en cuanto a los hechos. La descripción que hace el Gobierno de que las actividades del Sr. Dũng consistentes en poner de relieve cuestiones de derechos humanos en Viet Nam eran “actividades antiestatales” es una caracterización deliberadamente errónea de su labor. El Sr. Dũng fue privado de libertad por realizar actividades que en cualquier otro Estado que cumpliera con el estado de derecho se considerarían como un ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión.

50. La afirmación del Gobierno de que el Sr. Dũng admitió haber participado en conversaciones sobre el modo de llevar a cabo una resistencia violenta es falsa. El Sr. Dũng niega con vehemencia las acusaciones en su contra y se ha negado a llevar el uniforme de la prisión marcado con la palabra “culpable”. Siempre ha defendido los métodos no violentos para facilitar el cambio democrático. El Gobierno no ha presentado ni precisado ninguna prueba que demuestre que el Sr. Dũng estuvo involucrado en la difusión de material violento extremista, entre ellas ningún vínculo con cuentas de medios sociales que lo conecten con esas alegaciones.

51. Según el Gobierno, la policía de Ciudad Ho Chi Minh emitió una orden de custodia judicial y detención de emergencia el 14 de septiembre de 2018, diez días después de que el Sr. Dũng fuera detenido. La fuente señala opiniones en las que el Grupo de Trabajo ha encontrado un flagrante desprecio del procedimiento penal por parte de las autoridades vietnamitas, en particular un incumplimiento persistente de la obligación de proporcionar copias de las órdenes de detención a periodistas, blogueros y activistas cuando son detenidos. Cabe destacar que el Gobierno no responde a la alegación de que el Sr. Dũng y su familia no fueron informados de las razones de su detención.

52. El artículo 118 del Código Penal no se ajusta plenamente a las convenciones internacionales de derechos humanos. El Gobierno no responde a las críticas formuladas por mecanismos internacionales de derechos humanos con respecto a esa disposición. El

Gobierno no especifica de qué modo establece una distinción clara entre el ejercicio de las libertades democráticas y las actividades ilegales el artículo 118, ni los comportamientos que constituyen actividades ilegales o el modo en que están interpretando esa disposición los tribunales.

53. El Gobierno confirma que al abogado del Sr. Dững se le permitió participar en las actuaciones solo después del 18 de diciembre de 2018, cuando la investigación había finalizado. No hay una explicación adecuada de por qué era tan grave el presente caso como para justificar esa manera de proceder ni información sobre el modo en que podría haberse visto afectada la investigación si el Sr. Dững se hubiera reunido con su abogado. Desde el 4 de septiembre de 2018, al Sr. Dững solo se le han permitido dos reuniones con su abogado, una de ellas el 5 de enero de 2020. Estuvo en régimen de incomunicación desde el 4 de septiembre de 2018 hasta el 2 de agosto de 2019, cuando se le permitió una breve visita de su esposa. Esa visita duró solo 30 minutos y no los 60 minutos que asigna ordinariamente la prisión para las visitas familiares, tuvo lugar bajo fuerte vigilancia de los guardias de la prisión y la esposa del Sr. Dững solo pudo hablar con él a través de una mampara de cristal. Desde entonces, a la esposa del Sr. Dững se le ha permitido visitarlo una vez al mes. El Sr. Dững ha recibido seis visitas de familiares durante la prisión preventiva.

54. La prisión preventiva del Sr. Dững ha durado más de 19 meses. El Gobierno tuvo la oportunidad de explicar el retraso, pero no lo hizo. Se informó al Sr. Dững de que su juicio tendría lugar el 14 de enero de 2020, pero se ha aplazado y no se ha comunicado ninguna fecha nueva. Las condiciones de privación de libertad del Sr. Dững son sumamente onerosas y están afectando a su salud física y mental.

Deliberaciones

55. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno la información suministrada.

56. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones. Las meras afirmaciones del Gobierno de que se han seguido los procedimientos legales no bastan para refutar las presunciones de la fuente (A/HRC/19/57, párr. 68)²³.

57. La fuente alega que el Sr. Dững fue detenido el 4 de septiembre de 2018 mientras estaba retransmitiendo en directo una protesta en Ciudad Ho Chi Minh. Según la fuente, los agentes que efectuaron la detención no proporcionaron una orden de detención al Sr. Dững en el momento de su detención, no le informaron sin demora de las razones de la detención y no le acusaron de nada en el momento de la detención. La orden de detención que se presentó posteriormente tenía fecha de 21 de septiembre de 2018, 17 días después de la detención del Sr. Dững, y fue recibida por la familia del Sr. Dững el 5 de octubre de 2018. En su respuesta, el Gobierno afirma que las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh emitieron una orden de custodia judicial y una orden de detención de emergencia contra el Sr. Dững el 14 de septiembre de 2018. Se mostraron al Sr. Dững las órdenes, que firmó, y se le informó de las acusaciones. El Gobierno afirma que las alegaciones de la fuente de que no hubo ninguna orden y de que el Sr. Dững no fue informado de las razones de su detención son infundadas²⁴.

²³ El Gobierno adjuntó 36 documentos en vietnamita, que no es uno de los tres idiomas de trabajo del Grupo de Trabajo. Se pidió al Gobierno que tradujera al inglés los documentos adjuntados. El 4 de febrero de 2020 el Gobierno proporcionó una lista de los documentos en inglés pero no tradujo su contenido. La lista incluye: una orden de custodia judicial, una orden de detención de emergencia, una nota sobre la participación de los abogados defensores, un documento relativo a un reconocimiento médico y recibos de suministros familiares.

²⁴ El Gobierno no sostiene que el Sr. Dững fuese detenido en flagrante delito, lo que podría haber evitado la necesidad de una orden de detención.

58. El Grupo de Trabajo considera que la fuente ha presentado indicios razonables de que las autoridades no presentaron una orden de detención en el momento de la detención del Sr. Dững. Esa alegación no ha sido refutada por el Gobierno. El Gobierno no presentó ninguna razón por la que no se pudieran haber seguido los procedimientos normales de detención. Además, el Gobierno no explicó la naturaleza de una orden de custodia judicial y una orden de detención de emergencia, las diferencias entre ambas órdenes ni las circunstancias en que se ejecutarían. Además, la fuente hace notar la afirmación del Gobierno de que las órdenes se emitieron el 14 de septiembre de 2018; no podrían haberse mostrado al Sr. Dững cuando fue detenido diez días antes²⁵. Por último, el Grupo de Trabajo ha determinado en una serie de casos recientes que no se presentó una orden de detención en el momento de la detención, lo que parece indicar que las afirmaciones de la fuente son dignas de crédito²⁶.

59. Por razones similares, el Grupo de Trabajo considera que la fuente ha presentado indicios razonables de que el Sr. Dững no fue informado de las razones de su detención cuando fue detenido el 4 de septiembre de 2018 y no fue informado sin demora de las acusaciones formuladas contra él²⁷. El Gobierno afirmó que se cumplían esos requisitos y que se había tomado la decisión de iniciar un procedimiento contra el Sr. Dững por una acusación con arreglo al artículo 118 del Código Penal el 21 de septiembre de 2018, 17 días después de su detención. Sin embargo, el propósito de la notificación sin demora de las acusaciones es facilitar la determinación de si la privación de libertad es apropiada²⁸. Ese requisito no se ha cumplido en el presente caso: el Gobierno no ha demostrado que proporcionara razones para la detención en el momento de la misma²⁹ ni, como se examina más adelante, que cumpliera lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto³⁰.

60. Conforme al artículo 9, párrafo 1, del Pacto, nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. El artículo 9, párrafo 2, establece que toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. El Sr. Dững fue detenido sin que se le presentara una orden de detención, en violación del artículo 9, párrafo 1, del Pacto³¹. No se le informó de las razones de su detención en el momento de la misma ni se le informó sin demora de las acusaciones formuladas contra él, en violación del artículo 9, párrafo 2, y el artículo 14,

²⁵ El Gobierno parece sugerir que el Sr. Dững y otras personas fueron citados el 4 de septiembre de 2018, pero que la detención tuvo lugar el 14 de septiembre de 2018. Incluso aunque así fuera, no hay pruebas de que se presentara una orden en ese momento. El Grupo de Trabajo observa que otros siete miembros de *Hien Phap* también fueron presuntamente detenidos el 4 de septiembre de 2018 o alrededor de esa fecha.

²⁶ Opiniones núm. 45/2019, párr. 50; núm. 44/2019, párr. 51; núm. 9/2019, párr. 29; núm. 8/2019, párr. 49; núm. 46/2018, párr. 48; núm. 45/2018, párr. 40; núm. 36/2018, párr. 39; núm. 35/2018, párr. 26; y núm. 75/2017, párr. 35. Aunque no todos esos casos se referían a protestas, parecen indicar una tendencia de no presentar una orden de detención.

²⁷ El artículo 9, párrafo 2, del Pacto exige la notificación sin demora de la acusación, lo que no significa necesariamente en el momento de la detención (Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 30).

²⁸ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 30. Véase también CAT/C/VNM/CO/1, párrs. 16 y 17.

²⁹ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 30. Véase también el dictamen del Comité en *Smirnova c. la Federación de Rusia* (CCPR/C/81/D/712/1996, párr. 10.3), en el que el Comité determinó que no se había violado el derecho a la notificación sin demora de las acusaciones cuando una persona había sido notificada previamente de las acusaciones y se le habían dado las razones para la detención.

³⁰ Véase *McLawrence c. Jamaica* (CCPR/C/60/D/702/1996, párr. 5.9), en donde el Comité de Derechos Humanos determinó que, siempre que se cumpla lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto, no es necesario que se faciliten los detalles de la acusación en el momento de la detención.

³¹ No basta con que exista una ley que autorice la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo a las circunstancias del caso mediante una orden de detención (Opiniones núm. 45/2019, párr. 51; núm. 44/2019, párr. 52; núm. 46/2018, párr. 48; y núm. 36/2018, párr. 40).

párrafo 3 a), del Pacto. Una detención es arbitraria cuando se lleva a cabo sin informar a la persona detenida de las razones de la misma³².

61. Además, la fuente alega que el Sr. Dũng estuvo en régimen de incomunicación desde el 4 de septiembre de 2018 hasta el 2 de agosto de 2019 y que actualmente se encuentra en prisión preventiva, que ya ha durado más de 19 meses. El Gobierno parece confirmar que el Sr. Dũng fue mantenido en régimen de incomunicación, ya que su abogado no pudo tomar parte en las actuaciones antes del 18 de diciembre de 2018 y el Sr. Dũng no se reunió con su esposa hasta el 2 de agosto de 2019. No hay nada en la información recibida de cada una de las partes que indique que el Sr. Dũng haya sido llevado sin demora, si es que lo ha sido, ante un juez durante toda su prisión preventiva. De hecho, el Gobierno afirma que las prórrogas de la privación de libertad del Sr. Dũng fueron aprobadas por la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh de conformidad con el Código de Procedimiento Penal y que su juicio está pendiente³³.

62. El Grupo de Trabajo considera que el Sr. Dũng no fue llevado sin demora ante una autoridad judicial para impugnar su privación de libertad, en violación del artículo 9, párrafo 3, del Pacto. Como ha señalado el Grupo de Trabajo, la Fiscalía Popular no es una autoridad judicial independiente y no satisface los criterios del artículo 9³⁴. Además, como han afirmado el Grupo de Trabajo y otros mecanismos de derechos humanos, mantener a las personas en régimen de incomunicación viola su derecho a impugnar la legalidad de la privación de libertad ante un tribunal en virtud del artículo 9, párrafos 3³⁵ y 4, del Pacto³⁶. La supervisión judicial de la privación de libertad es una salvaguardia fundamental de la libertad personal³⁷ y es esencial para garantizar que la privación de libertad tenga un fundamento jurídico. Dado que el Sr. Dũng no ha podido impugnar su privación de libertad ante un tribunal, se ha violado su derecho a un recurso efectivo en virtud del artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 2, párrafo 3, del Pacto. También se le colocó fuera de la protección de la ley, en violación de su derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica en virtud del artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 16 del Pacto. Además, de conformidad con el artículo 9, párrafo 3, del Pacto, la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla y debe ordenarse por el plazo más breve posible³⁸. Es decir, la libertad se reconoce en el artículo 9, párrafo 3, como un principio y la privación de libertad como una excepción³⁹. La privación de libertad previa al juicio debe basarse en una determinación individualizada de que dicha medida resulta razonable y necesaria para fines tales como impedir la fuga, la alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito⁴⁰. En el presente caso, no parece haber habido ninguna revisión judicial individualizada de la situación del Sr. Dũng ni haberse considerado alternativas a la privación de libertad. Su prisión preventiva no estaba debidamente constituida ni revisada y, por lo tanto, carecía de fundamento jurídico.

63. Por estas razones, el Grupo de Trabajo considera que el Gobierno no estableció un fundamento jurídico para la detención y privación de libertad del Sr. Dũng. Su detención es arbitraria y se inscribe en la categoría I.

³² Véanse, por ejemplo, las Opiniones núm. 46/2019, párr. 51; y núm. 10/2015, párr. 34; y CAT/C/VNM/CO/1, párr. 16.

³³ Véanse la Opinión núm. 46/2018, párrs. 50 y 51, en la que el Grupo de Trabajo determinó que la legislación que permitía que la Fiscalía Popular prorrogase la privación de libertad y que pretendía denegar la revisión judicial era incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos, y CAT/C/VNM/CO/1, párrs. 24 y 25.

³⁴ E/CN.4/1995/31/Add.4, párr. 57 c). Véanse también las Opiniones núm. 45/2019, párr. 52; núm. 44/2019, párr. 53; núm. 46/2018, párr. 50; núm. 35/2018, párr. 37; y núm. 75/2017, párr. 48. Véanse también Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 32; CCPR/C/VNM/CO/3, párr. 26; y CAT/C/VNM/CO/1, párrs. 24 y 25.

³⁵ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 35.

³⁶ Opiniones núm. 45/2019, núm. 44/2019, núm. 9/2019, núm. 35/2018, núm. 46/2017 y núm. 45/2017.

³⁷ Véanse el principio 3 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal y CAT/C/VNM/CO/1, párr. 24.

³⁸ A/HRC/19/57, párrs. 48 a 58.

³⁹ *Ibid.*, párr. 54.

⁴⁰ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 38.

64. Además, la fuente alega que el Sr. Dững ha sido detenido como resultado del ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de opinión y de expresión y a participar en la dirección de los asuntos públicos con arreglo a los artículos 19 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los artículos 19 y 25 del Pacto. El Gobierno sostiene que el Sr. Dững fue detenido por violar la legislación vietnamita, a saber, el artículo 118 del Código Penal.

65. El Grupo de Trabajo ha examinado la aplicación de disposiciones vagas y excesivamente amplias del derecho penal de Viet Nam en numerosas opiniones, y ha llegado a la conclusión de que las condenas impuestas en virtud de esas disposiciones por el ejercicio pacífico de derechos no pueden considerarse compatibles con la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto⁴¹. El Grupo de Trabajo llegó a una conclusión similar durante su visita a Viet Nam en octubre de 1994 y señaló que las disposiciones vagas sobre seguridad nacional no distinguen entre los actos violentos capaces de amenazar la seguridad nacional y el ejercicio pacífico de derechos⁴². Si bien el Gobierno afirma que el artículo 118 establece una distinción clara entre el ejercicio de las libertades democráticas y las actividades ilícitas, no especifica el modo en que se logra esa distinción ni los comportamientos que constituyen actividades ilícitas.

66. En el presente caso, la fuente informa de que el Sr. Dững difundió artículos en medios sociales en los que se criticaba al Gobierno y retransmitió en directo vídeos de protestas pacíficas. De hecho, el Sr. Dững fue detenido mientras filmaba pacíficamente una protesta pública, cuando informaba y expresaba sus opiniones sobre cuestiones de interés público. Según la fuente, se convirtió en blanco por su activismo acerca de la protección de los derechos constitucionales y la democracia.

67. El Gobierno afirma que el Sr. Dững estaba involucrado en un grupo patrocinado por personas en el extranjero para llevar a cabo “actividades antiestatales”, entre ellas difundir videoclips en Internet que incitaban a la población a participar en reuniones ilegales y a utilizar armas para atentar contra la policía y aislar diversas zonas públicas con miras a derrocar al Gobierno. Según el Gobierno, el Sr. Dững admitió que había aportado la idea de quemar motocicletas viejas, e intercambió información con otros miembros del grupo sobre el modo de fabricar bombas de gasolina para distribuirlas a otros manifestantes con el fin de atentar contra la policía y provocar la violencia de las multitudes. Una búsqueda en sus cuentas de medios sociales reveló documentos y vídeos que difamaban la administración popular, distorsionaban la política del Estado e incitaban a los manifestantes a la violencia.

68. El artículo 19, párrafo 2, del Pacto dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Ese derecho abarca el pensamiento político, los comentarios sobre los asuntos públicos, la discusión sobre derechos humanos y el periodismo⁴³. Ampara la defensa y la expresión de opiniones, incluso las que no están en sintonía con la política del Gobierno⁴⁴. El ejercicio de la libertad de expresión en Internet, en el presente caso por conducto de los medios sociales, presenta diferencias significativas con respecto a los medios de comunicación tradicionales. Por ejemplo, la distribución y recepción de información a través de la Internet es más rápida, más amplia y de más fácil acceso en los planos local y mundial⁴⁵. Sin embargo, el uso de Internet para difundir información no está menos sujeto a la protección del artículo 19, párrafo 2, del Pacto.

⁴¹ Opiniones núm. 45/2019, núm. 44/2019, núm. 8/2019, núm. 75/2017, núm. 27/2017, núm. 26/2017, núm. 26/2013, núm. 27/2012, núm. 24/2011, núm. 6/2010, núm. 1/2009 y núm. 1/2003. Véase también A/HRC/41/7, párrs. 38.73, 38.171, 38.175, 38.177, 38.183 y 38.184, 38.187 a 38.191 y 38.196 a 38.198.

⁴² E/CN.4/1995/31/Add.4, párrs. 58 a 60. Véase también CCPR/C/VNM/CO/3, párr. 45 d).

⁴³ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34, párr. 11.

⁴⁴ Opiniones núm. 8/2019, párr. 55; y núm. 79/2017, párr. 55.

⁴⁵ Opiniones núm. 80/2019, párr. 93; y núm. 39/2019, párrs. 93 a 96. Véase también E/CN.4/2006/7, párr. 36.

69. El Grupo de Trabajo considera que la conducta del Sr. Dững está protegida por el derecho a la libertad de opinión y de expresión consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto. Asimismo, el Grupo de Trabajo considera que el Sr. Dững se dedicó a la promoción de la democracia y a la sensibilización sobre los derechos constitucionales en Viet Nam y fue privado de libertad por ejercer su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos en violación del artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 25 a) del Pacto⁴⁶.

70. No hay nada que indique que se apliquen en el presente caso las restricciones permisibles de esos derechos establecidas en los artículos 19, párrafo 3, y 25 del Pacto. El Grupo de Trabajo no está convencido de que el enjuiciamiento del Sr. Dững sea necesario para proteger un interés legítimo en virtud del Pacto, ni de que la detención y privación de libertad del Sr. Dững sean una respuesta proporcionada a sus actividades pacíficas. Es importante señalar que no hay pruebas que sugieran que el Sr. Dững haya estado implicado en la planificación o la realización de actividades violentas o la incitación a ellas o que pueda considerarse razonablemente que amenaza la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos o la reputación de los demás. El Consejo de Derechos Humanos ha instado a los Estados a que se abstengan de imponer restricciones que no sean compatibles con el artículo 19, párrafo 3⁴⁷. El Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

71. De conformidad con los artículos 1 y 6 c) de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y a señalar a la atención del público la observancia de los derechos humanos⁴⁸. La fuente ha demostrado que el Sr. Dững fue privado de libertad por el ejercicio de sus derechos en virtud de la Declaración promoviendo la democracia y los derechos constitucionales. El Grupo de Trabajo ha determinado que la privación de libertad de personas debido a sus actividades como defensoras de los derechos humanos vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley reconocido en el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 26 del Pacto⁴⁹.

72. El Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que la privación de libertad del Sr. Dững se derivó del ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de opinión y expresión, así como del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, y fue contraria al artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al artículo 26 del Pacto. Su privación de libertad es arbitraria y se inscribe en la categoría II.

73. Como ha declarado en ocasiones anteriores el Grupo de Trabajo, el principio de legalidad exige que las leyes se formulen con precisión suficiente para que sean accesibles y comprensibles para las personas, de modo que puedan ajustar su conducta en consecuencia⁵⁰. En el presente caso, la aplicación de una disposición vaga y excesivamente amplia añade peso a la conclusión del Grupo de Trabajo de que la privación de libertad del Sr. Dững se inscribe en la categoría II. Además, el Grupo de Trabajo considera que, en algunas circunstancias, las leyes pueden ser tan vagas y excesivamente amplias que es imposible invocar un fundamento jurídico que justifique la privación de libertad.

⁴⁶ Los ciudadanos pueden participar en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante el debate público. Véase Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 25, párr. 8. Véanse también las Opiniones núm. 45/2019, núm. 44/2019, núm. 9/2019, núm. 46/2018, núm. 45/2018, núm. 36/2018, núm. 35/2018, núm. 40/2016, núm. 26/2013, núm. 42/2012, núm. 46/2011 y núm. 13/2007.

⁴⁷ Resolución 12/16 del Consejo de Derechos Humanos, párr. 5 p).

⁴⁸ Véase también la resolución 74/146 de la Asamblea General, párr. 12.

⁴⁹ Opiniones núm. 45/2019, núm. 44/2019, núm. 9/2019, núm. 46/2018, núm. 45/2018, núm. 36/2018, núm. 35/2018, núm. 79/2017 y núm. 75/2017.

⁵⁰ Opinión núm. 41/2017, párrs. 98 a 101. Véanse también la Opinión núm. 62/2018, párr. 57; y Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 22, y observación general núm. 34, párr. 25.

74. Habida cuenta de su conclusión de que la privación de libertad del Sr. Dũng es arbitraria y se inscribe en la categoría II, el Grupo de Trabajo pone de relieve que no debe celebrarse ningún juicio contra el Sr. Dũng. En la actualidad está en prisión preventiva y su juicio está pendiente. La información presentada por la fuente revela violaciones del derecho del Sr. Dũng a un juicio imparcial desde su privación de libertad hasta la fecha.

75. La fuente alega que el Sr. Dũng no ha tenido un acceso adecuado a su abogado y hace notar la confirmación del Gobierno de que el abogado del Sr. Dũng solo fue autorizado a participar en las actuaciones después del 18 de diciembre de 2018, cuando había finalizado la investigación. Desde el 4 de septiembre de 2018, al Sr. Dũng solo se le han permitido dos reuniones con su abogado, una de ellas el 5 de enero de 2020. El Gobierno afirma que debido a la naturaleza grave del caso del Sr. Dũng, que implicaba a muchas personas en muchas localidades y la necesidad extrema de mantener el secreto durante las investigaciones, los abogados defensores solo podían participar en el procedimiento después de la fase de investigación, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal.

76. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recibir asistencia letrada de un abogado de su elección en cualquier momento de su privación de libertad, incluso inmediatamente después de su aprehensión, y dicho acceso se facilitará sin demora⁵¹. El hecho de que al Sr. Dũng no se le proporcionara acceso a un abogado durante la investigación violó su derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa en virtud del artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto. Toda legislación que pretenda suprimir el derecho a asistencia letrada es intrínsecamente contraria a las normas internacionales de derechos humanos⁵². Incluso aunque esas disposiciones legislativas fueran aceptables, el Gobierno no ha dado una explicación adecuada de por qué el caso del Sr. Dũng era tan grave como para justificar la denegación del acceso a un asesor jurídico durante la investigación y no se ha facilitado ninguna información sobre la forma en que podría haberse visto afectada la investigación si el Sr. Dũng se hubiera reunido con su abogado. El presente es otro ejemplo de caso en el que se ha denegado o limitado la representación letrada a personas que enfrentaban graves acusaciones, lo que parece indicar que en Viet Nam se deniega sistemáticamente el acceso a un abogado durante el proceso penal⁵³.

77. La fuente sostiene que no se concedió al Sr. Dũng el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, dado que lleva más de 19 meses privado de libertad sin juicio desde su detención el 4 de septiembre de 2018. Según la fuente, se informó al Sr. Dũng de que su juicio tendría lugar el 14 de enero de 2020, pero se ha aplazado y no se ha comunicado ninguna nueva fecha. El carácter razonable de la dilación en llevar el caso a juicio debe evaluarse a la luz de las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta la complejidad de este, la conducta del imputado y la manera en que las autoridades hayan abordado el asunto⁵⁴. El retraso en llevar a juicio al Sr. Dũng es inaceptablemente largo, en violación de los artículos 9, párrafo 3, y 14, párrafo 3 c), del Pacto. La gravedad del presente caso se ve exacerbada por el hecho de que el caso del Sr. Dũng no parece haber sido revisado por una autoridad judicial y, como se ha señalado más arriba, el Grupo de Trabajo tiene claro que el Sr. Dũng ha sido privado de libertad, aunque no debería haberlo sido, únicamente por el ejercicio de sus derechos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos⁵⁵.

⁵¹ Véanse el principio 9 y la directriz 8 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal. Véase también Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 35.

⁵² CCPR/C/VNM/CO/3, párrs. 25, 26, 35 y 36.

⁵³ Opiniones núm. 45/2019, núm. 44/2019, núm. 9/2019, núm. 46/2018, núm. 35/2018, núm. 79/2017, núm. 75/2017, núm. 27/2017, núm. 26/2017 y núm. 40/2016. Véase también CAT/C/VNM/CO/1, párrs. 16 y 17.

⁵⁴ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 37, y observación general núm. 32, párr. 35. Véase también CCPR/C/VNM/CO/3, párrs. 35 y 36.

⁵⁵ Véase la Opinión núm. 46/2019, párr. 63, en la que el Grupo de Trabajo no pudo llegar a la conclusión de que se trataba de una violación inscrita en la categoría II o de que una dilación de 16 meses antes del juicio no fuese razonable.

78. El Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que las violaciones mencionadas del derecho a un juicio imparcial son de tal gravedad que dan a la detención del Sr. Dũng un carácter arbitrario con arreglo a la categoría III.

79. Además, el Grupo de Trabajo considera que el Sr. Dũng se convirtió en blanco debido a sus actividades como defensor de los derechos humanos, en particular su defensa de la democracia, incluida la filmación de protestas públicas, y su labor de sensibilización sobre los derechos constitucionales en Viet Nam. Al parecer, otros siete miembros de *Hien Phap* también fueron detenidos a principios de septiembre de 2018, lo que parece indicar que las autoridades están tratando de silenciar al Sr. Dũng y a sus colegas. Parece haber una tendencia en Viet Nam a privar de libertad a los defensores de los derechos humanos por su labor, y el presente caso es otro ejemplo⁵⁶. Además, en la discusión más arriba relativa a la categoría II, el Grupo de Trabajo ha establecido que la privación de libertad del Sr. Dũng obedeció al ejercicio pacífico de sus derechos en virtud del derecho internacional. Cuando la privación de libertad ha obedecido al ejercicio activo de derechos civiles y políticos, hay una fundada presunción de que esa privación de libertad constituye también una vulneración del derecho internacional en razón de una discriminación basada en opiniones políticas o de otra índole⁵⁷.

80. El Sr. Dũng fue privado de su libertad por motivos discriminatorios, a saber, por su condición de defensor de los derechos humanos y por su opinión política o de otra índole. Su privación de libertad constituye una violación de los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto, y es arbitraria conforme a la categoría V. El Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

81. Además, el Grupo de Trabajo observa que no se permitió al Sr. Dũng ponerse en contacto con su familia hasta el 2 de agosto de 2019, cuando se le permitió una breve visita de su esposa. El Gobierno confirma que dicha visita tuvo lugar, por primera vez, el 2 de agosto de 2019. La fuente afirma que la visita duró solo 30 minutos y no los 60 minutos que se asignan ordinariamente para las visitas familiares. Tuvo lugar bajo fuerte vigilancia de los guardias de la prisión y la esposa del Sr. Dũng solo pudo hablar con él a través de una mampara de cristal. Posteriormente, a la esposa del Sr. Dũng se le ha permitido visitarlo una vez al mes. El Sr. Dũng ha recibido seis visitas de familiares durante la prisión preventiva.

82. Las restricciones impuestas al contacto del Sr. Dũng con su familia violaron su derecho a tener contacto con el mundo exterior en virtud de las reglas 43, párrafo 3, y 58, párrafo 1, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (las Reglas Nelson Mandela) y los principios 15 y 19 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Aunque el Gobierno afirma que el Sr. Dũng recibió suministros de su familia, esto no puede sustituir a su derecho a mantener correspondencia con su familia y recibir visitas familiares. Además, el Gobierno niega la denuncia de que no se notificó a la familia del Sr. Dũng su detención y paradero, pero no ha facilitado ninguna información que respalde esas afirmaciones. El hecho de que no se notificara a su familia la detención y paradero del Sr. Dũng violó el principio 16, párrafo 1, del Conjunto de Principios⁵⁸. De hecho, el Grupo de Trabajo considera que el Sr. Dũng fue privado de libertad inicialmente en circunstancias que equivalen a una desaparición forzada, ya que su familia no pudo localizarlo y las autoridades no parecen haber revelado su paradero.

83. Al Grupo de Trabajo le preocupa que, al parecer, las condiciones de privación de libertad del Sr. Dũng son sumamente onerosas y están afectando a su salud física y mental. El Gobierno afirma que el Sr. Dũng goza de un estado de salud normal y que se le practicó un reconocimiento médico antes de ser admitido en la prisión y que también recibe una atención continua durante su estancia en la prisión. El Sr. Dũng lleva privado de libertad

⁵⁶ Opiniones núm. 45/2019, núm. 44/2019, núm. 9/2019, núm. 46/2018, núm. 45/2018, núm. 36/2018, núm. 35/2018, núm. 79/2017, núm. 75/2017 y núm. 27/2017. Véase también CCPR/C/VNM/CO/3, párr. 25.

⁵⁷ Opiniones núm. 59/2019, párr. 79; núm. 13/2018, párr. 34; y núm. 88/2017, párr. 43.

⁵⁸ Véase también CAT/C/VNM/CO/1, párrs. 16 y 17.

más de 19 meses, sin embargo, ha permanecido en régimen de incomunicación durante casi 1 año. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lo ponga en libertad de forma inmediata e incondicional y a que se asegure de que recibe atención médica.

84. El presente es uno de los muchos casos que se han presentado al Grupo de Trabajo en los últimos años en relación con la detención arbitraria en Viet Nam⁵⁹. Esos casos siguen un patrón común de detención que no cumple con las normas internacionales; prisión preventiva prolongada sin acceso a revisión judicial; denegación de acceso a la asistencia letrada; privación de libertad en régimen de incomunicación; enjuiciamiento, invocando delitos tipificados de forma imprecisa, por el ejercicio pacífico de los derechos humanos; y denegación de acceso al mundo exterior. Ese patrón indica un problema sistémico de detención arbitraria en Viet Nam que, de continuar, puede constituir una violación grave del derecho internacional⁶⁰.

85. El Grupo de Trabajo agradecería la oportunidad de colaborar constructivamente con el Gobierno para tratar de la detención arbitraria. Ha transcurrido un tiempo considerable desde su última visita a Viet Nam, efectuada en octubre de 1994, y el Grupo de Trabajo estima que ya es momento de realizar otra. El 11 de junio de 2018 el Grupo de Trabajo reiteró las solicitudes enviadas anteriormente al Gobierno para realizar una visita al país y seguirá buscando una respuesta positiva.

Decisión

86. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Ngô Văn Dũng es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafos 1 y 3, 9, 14, 16, 19, 25 a) y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V.

87. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Viet Nam que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Dũng sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

88. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, en particular el riesgo para la salud del Sr. Dũng, el remedio adecuado sería poner al Sr. Dũng inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto actual de la pandemia mundial de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la amenaza que plantea en los lugares de reclusión, el Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno a que adopte medidas urgentes para garantizar la puesta en libertad inmediata del Sr. Dũng.

89. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la detención arbitraria del Sr. Dũng y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

90. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adapte sus leyes, en particular el artículo 118 del Código Penal, de forma que estén en consonancia con las recomendaciones formuladas en la presente opinión y con los compromisos asumidos por Viet Nam en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

91. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos para que tomen las medidas correspondientes.

⁵⁹ Opiniones núm. 45/2019, núm. 44/2019, núm. 9/2019, núm. 8/2019, núm. 46/2018, núm. 45/2018, núm. 36/2018, núm. 35/2018, núm. 79/2017, núm. 75/2017, núm. 27/2017, núm. 26/2017, núm. 40/2016, núm. 46/2015 y núm. 45/2015.

⁶⁰ Opinión núm. 47/2012, párr. 22.

92. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

93. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Dũng y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Dũng;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Dũng y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Viet Nam con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

94. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

95. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

96. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado⁶¹.

[Aprobada el 1 de mayo de 2020]

⁶¹ Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.